

Cuba: reformas y bienestar. Un análisis de los bienes no monetarios

Cuba: reforms and well-being. An analysis of non-monetary assets

Francesco Schettino,*Sara Romanò,Alberto Gabriele,**
Dayma Echevarría León******

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial
(CC BY-NC) 4.0 Internacional

Perfiles Latinoamericanos, 30(59) | 2022 | e-ISSN: 2309-4982

doi: dx.doi.org/10.18504/pl3059-015-2022

Recibido: 22 de mayo de 2020

Aceptado: 28 de julio de 2021

Resumen

Nuestro estudio es el primer análisis que muestra la tendencia de la distribución del bienestar en Cuba, en el periodo de las reformas económicas y sociales impulsadas por el presidente Raúl Castro. Los análisis revelan que el bienestar, premisa del desarrollo humano y medido como acceso a bienes y servicios fundamentales y no monetarios, ha aumentado, a pesar de la crisis económica; en tanto que las desigualdades en el acceso al bienestar han aumentado poco en el periodo 2006-2011 y han disminuido en el periodo siguiente, para llegar en 2014 a un nivel ligeramente inferior al de 2006.

Palabras clave: Cuba, bienestar, desigualdad, bienes no monetarios, desarrollo humano, economía política, excepcionalismo cubano, datos MICS-UNICEF.

Abstract

This study is the first assessment of the well-being distribution in Cuba during the period of economic and social reforms launched by the president Raúl Castro. Our results show that the level of well-being, measured as the access to fundamental goods and services and non-monetary assets, raised despite the economic crisis over the period 2006-2014. Inequality in the distribution of well-being slightly increased until 2011, but decreased in the subsequent period 2011-2014, for reaching in 2014 a level just below that observed in 2006.

Keywords: Cuba, well-being, inequality, non-monetary assets, human development, Cuban exceptionalism, MICS-UNICEF data.

* Doctor en Economía política por la Sapienza, Università di Roma. Profesor Asociado del Departamento de Giurisprudenza, Università della Campania L.Vanvitelli (Italia) | francesco.schettino@unicampania.it | <https://orcid.org/0000-0001-5123-1229>

** Doctora en Sociología por la Universidad de Turín y la Universidad de La Habana (Cuba) | sara.romano@unito.it | <https://orcid.org/0000-0002-5912-7060>

*** Master en Economía, senior economist en Sbilanciamoci | gabrielealberto3@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0002-7264-1101>

**** Doctora en Sociología, Profesora Titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana, Universidad de La Habana (Cuba) | dayma@ceec.uh.cu | <https://orcid.org/0000-0003-3948-2118>

Introducción

Gran parte de la literatura sobre desarrollo económico y social, especialmente en las sociedades industrializadas occidentales, se ha centrado desde el inicio en la cuestión de la riqueza y su distribución. El uso de variables monetarias —típicamente, ingresos y gastos— siempre ha prevalecido en este programa de investigación. Esto no sorprende ya que, desde los estudios de autores clásicos de las ciencias sociales, la transformación progresiva de todas las relaciones sociales y económicas existentes en relaciones monetarias se considera una característica clave del capitalismo. Sin embargo, el uso de variables monetarias tiene límites, algunos de naturaleza teórica y sustantiva y otros de naturaleza más empírica y de medición como se verá más adelante.

Una crítica teórica y sustantiva que se ha hecho al uso exclusivo de las variables monetarias en los estudios sobre la distribución de la riqueza proviene de la literatura sobre el desarrollo y la economía del bienestar, cuyos fundamentos éticos y filosóficos han sido profundamente influenciados por las contribuciones pioneras de Sen (1970) y Rawls (1971). De hecho, ahora es casi unánime entre académicos y profesionales el consenso de que los niveles de desarrollo de un país y la riqueza y el bienestar de un individuo deben evaluarse con un enfoque multidimensional que incluya los ingresos monetarios, pero también las libertades y oportunidades para satisfacer las necesidades humanas fundamentales, por ejemplo, acceso a la educación, a la atención médica y a la cohesión social, es decir, a todo aquello que permite a los individuos desarrollar y expresar sus habilidades y talentos (Sen, 1999; Dollar & Kraay, 2002; Rodrik, 2011). Esta nueva perspectiva ha contribuido al desarrollo y a la institucionalización del índice de desarrollo humano (IDH) compuesto por indicadores sobre la posesión o acceso a bienes y servicios fundamentales: la educación (número de años de educación alcanzado y esperado), la salud (la expectativa de vida), el nivel de vida (ingreso nacional bruto per cápita). “Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente” es el lema que acompaña el *Informe sobre el Desarrollo Humano* de 2019 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Dicho lema concentra las características clave de la perspectiva del desarrollo humano: la evaluación de la desigualdad debe enfocarse en los procesos de interacción entre salud, educación e ingresos con que se generan las diferencias de riqueza; se necesita abandonar el uso de los índices sintéticos unidimensionales y explorar cómo se manifiesta la desigualdad en el conjunto de una población, en diferentes lugares y a lo largo del tiempo; se debe volver el eje al futuro porque las desigualdades del desarrollo humano de hoy condicionarán las expectativas

de las personas que todavía deben nacer (PNUD, 2019, pp. 6-7). Por ejemplo, el PNUD estima que “alrededor del 17% de los niños nacidos en países con desarrollo humano bajo en 2000 habrán muerto antes de cumplir los 20 años, frente a tan solo el 1% de los nacidos en países con desarrollo humano muy alto” (ivi, p. 2). En los últimos años, en el cuadro de esta perspectiva multidimensional de lo que es desarrollo y riqueza, se han creado diferentes tipos de índices, es el caso del índice de desarrollo humano local, que agrega la dimensión ambiental a las de salud, educación y nivel de vida; el índice de desarrollo o de desigualdad de género, que considera la condición de las mujeres en asuntos de participación en la educación, el mercado laboral y la vida política; y el índice de pobreza multidimensional, que considera la posesión de activos y acceso a bienes básicos, como alimentos, agua y electricidad.

Los resultados de los estudios que usan variables monetarias no siempre coinciden con los de los que usan bienes o activos no monetarios: de hecho, los desequilibrios en la distribución de los ingresos a veces no se reflejan con la misma intensidad en la distribución de la riqueza patrimonial —ya que la distribución de esta última es generalmente más desigual (Milanovic, 2019; Piketty, 2014)—, o del acceso a los bienes fundamentales. De esta forma, si bien la ampliación de las privaciones extremas ha disminuido tendencialmente entre la población mundial (Informe de Desarrollo Humano, 2019), las desigualdades de ingresos siguen aumentando (Milanovic, 2019). Este comportamiento en parte se debe también a la institucionalización del Estado de bienestar, pues, donde existe, el acceso a los bienes fundamentales no depende exclusivamente de los ingresos (o gastos) monetarios personales o de la familia, sino también del acceso a los servicios públicos que asignan con mecanismos no comerciales bienes y servicios esenciales, como los de salud, educación primaria y seguridad ciudadana, entre otros. En este sentido, Cuba representa un caso interesante. De hecho, es uno de los países con alto desarrollo humano (Informe de Desarrollo Humano, 2019) —en 2017, su IDH era de 0.777, colocándose así en el grupo más alto (Informe de Desarrollo Humano, 2019)—, pese a ubicarse en la parte inferior en términos de desarrollo económico cuando se mide con los índices monetarios tradicionales. Además, aunque se encuentra en el continente con la mayor desigualdad del mundo, Cuba ha sido considerada durante muchos años como uno de los países más igualitarios (Mesa-Lago, 2015), si bien hay quienes sugieren que algo podría haber cambiado por las transformaciones sociales y económicas en las últimas décadas, las cuales podrían haber aumentado las desigualdades económicas y el deterioro en los servicios públicos (Álvarez & Máttar, 2004; Centeno, 2004).

Este artículo se centra en el tema del acceso a bienes y servicios básicos no monetarios ni alimentos que, junto a otros, representan la premisa para el de-

sarrollo humano en Cuba. Es el primer intento de analizar la distribución de esta forma particular de riqueza a nivel nacional —estudios similares se han llevado a cabo en el área de la capital (cfr. Romanò & Barrera, 2019— para el periodo comprendido entre 2006 y 2014, enfocado en bienes y servicios fundamentales no monetarios ni alimentos cuyo acceso en Cuba está regulado por mecanismos no comerciales, como el acceso a la educación para los dos sexos, y la modalidad de acceso al agua y al saneamiento, que son elementos clave para la salud, en especial durante el desarrollo infantil.

En el primer epígrafe ilustramos algunos elementos que caracterizan al sistema social y económico cubano. En el segundo se ofrece una breve discusión de las mediciones de desigualdad económica existentes en la literatura. En el tercero se describen los datos que utilizamos, las encuestas MICS-UNICEF (encuestas de indicadores múltiples) de 2006, 2011 y 2014, y la metodología utilizada para estimar el índice de bienestar, entendido como el acceso a bienes y servicios fundamentales (BSF) no monetarios ni alimentos. El cuarto epígrafe presenta los principales resultados. Concluimos con algunas consideraciones finales.

El caso de Cuba

En Cuba, la mayoría de las materias primas, infraestructura y servicios sociales, como salud, educación y seguridad, entre otros, son producidos o importados y distribuidos por empresas o instituciones estatales a precios subsidiados o con precios muy bajos que, por estas razones, difieren significativamente de lo que se observa en los mercados internacionales (Romanò, 2012; Romanò & Barrera, 2019; Domínguez *et al.*, 2012; Schettino & Gabriele, 2008). En el sistema cubano, el acceso libre o casi gratuito a bienes y servicios básicos está regulado por la universalidad: todos los ciudadanos y residentes pueden acceder a ellos independientemente de su posición en el mercado laboral. El término *espacios de igualdad* (Espina-Prieto, 2010) se usa en la literatura sobre Cuba para referirse a esas áreas sociales donde el acceso a bienes y servicios básicos está regulado por mecanismos no comerciales y criterios universales: salud, educación y necesidades básicas. Este modelo sigue vigente pese a las transformaciones sociales y económicas que han afectado al país en los últimos treinta años y que recordamos brevemente a continuación.

Durante la primera mitad de la década de 1990, forzado por la grave crisis económica causada por el colapso del bloque soviético, así como por el escenario internacional que se volvió más hostil, el gobierno cubano implementó algunas reformas económicas destinadas, por un lado, a introducir mecanis-

mos de mercado en algunos sectores específicos de la economía y, por otro, a contener los gastos públicos del Estado. Las principales reformas fueron:¹ la apertura de algunos sectores económicos a la inversión extranjera directa; la dolarización parcial de la economía; la creación de cooperativas agrícolas en antiguas empresas estatales agropecuarias; la apertura de microempresas familiares o cuentapropismo en algunos segmentos de la economía; la introducción de incentivos salariales para algunas categorías de trabajadores, y el recorte de los bienes subsidiados o gratuitos. Varias de estas reformas se contrajeron en la primera década de los 2000. Gracias a una recuperación económica parcial y a un contexto internacional menos hostil, el gobierno cubano controló los mecanismos de mercado introducidos en algunos sectores y, al mismo tiempo, promovió políticas que mitigaban los efectos sociales de las reformas de los noventa. Entre las políticas sociales de este periodo destacan, por ejemplo, las que apuntaban a la expansión de la educación terciaria, al aumento de los salarios de algunas categorías de trabajadores estatales, y a la sustitución de los bienes duraderos de alto consumo de energía utilizados por las familias cubanas y las instituciones (refrigeradores, televisores, aires acondicionados).

Unos años más tarde, impulsado por la crisis económica internacional de 2007-2008, Raúl Castro relanzó otro proceso de reformas económicas y sociales más coherente y ambicioso. Esta fase política y económica, llamada “proceso de actualización del modelo económico y social”, fue discutida y aprobada como una estrategia a largo plazo por el VI y VII Congresos del Partido Comunista de Cuba (contenido en las directrices para el desarrollo económico) celebrados, respectivamente, en 2011² y 2016.³ En otras palabras, desde 2011 las reformas de los noventa se han revitalizado y profundizado, sobre todo las relativas a la atracción de las inversiones extranjeras directas en ciertos sectores de la economía, a la expansión del sector no estatal con el aumento de las licencias para el cuentapropismo o sector privado nacional, y a la creación de cooperativas no agrícolas. También se han liberalizado algunos consumos personales, y eliminado las restricciones para los viajes al extranjero.

Las reformas adoptadas por el gobierno cubano, por profundas que sean en comparación con el pasado, aún parecen lentas y tímidas en comparación con las implementadas en otros países, como China y Vietnam. La flexibilización

¹ Para la descripción detallada de las medidas, véase Romanò (2013) y Domínguez (2012, 2004).

² El documento aprobado por el XI Congreso se titula “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución”.

³ El documento aprobado por el XI Congreso se llama “Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el periodo 2016-2021”.

progresiva de diversos segmentos de la economía, en especial los relacionados con las pequeñas y medianas empresas privadas, pareciera ser el cambio más significativo hasta hoy. Sin embargo, la extensión de estas liberalizaciones puede considerarse lenta ya que, todavía hasta 2014, alrededor del 72% de los ocupados sigue empleado en el sector estatal: 68.4% en 2018 (ONEI, 2015, 2020). Como consecuencia, se deduce que, a pesar de las reformas de ampliación del mercado, la mayoría de los ingresos laborales siguen dependiendo de salarios o pensiones estatales que se han mantenido igualitarios (Galbraith *et al.*, 2006). Pero debido a la crisis, estos salarios se han estancado o disminuido en términos reales desde la década de 1990. El resultado es que, incluso considerando los bienes distribuidos a precios subsidiados en el mercado racionado, los salarios y pensiones estatales son en general insuficientes para llegar al final del mes (García & Anaya, 2015). En este contexto, fuentes alternativas o adicionales de ingresos como, por ejemplo, las remesas, los ingresos por actividades informales o por cuenta propia, así como la disponibilidad universal de bienes y servicios básicos —típicamente la atención médica y los servicios de salud y educación, y en cierta medida la vivienda,⁴ etcétera— representan un apoyo fundamental para satisfacer las necesidades de las familias.

El lanzamiento del llamado “proceso de actualización del modelo económico y social” ha renovado el interés de explorar el impacto de las reformas sociales y económicas en la equidad. Los estudios sobre la desigualdad y riqueza en Cuba fueron pocos hasta la década de 1990. Hasta cierto punto, esta escasez se debía a la suposición ampliamente compartida de que Cuba era una sociedad muy igualitaria (Mesa-Lago, 2015). De hecho, una disminución progresiva de las desigualdades realmente ocurrió en los primeros treinta años de la Revolución, lo cual se refleja en la tendencia decreciente de las estimaciones del índice de Gini, cuyo valor, de acuerdo a Brundenius (1984, 2009), era de 0.51 en 1953 y de 0.22 en 1986. Mientras que un estudio más reciente estima que al final de la década de 1990 el índice de Gini alcanzó 0.38 (Ferriol, 2003), lo que demuestra un aumento progresivo de las desigualdades de ingresos como consecuencia de la crisis económica y las consiguientes reformas de los años

⁴ En los últimos años se han llevado a cabo algunas reformas relacionadas con el establecimiento de un mercado inmobiliario privado. En cualquier caso, actualmente la mayoría de los cubanos todavía viven en casas asignadas por el Estado o construidas de forma independiente con generosa ayuda pública y fondos propios. Sin embargo, la apertura del mercado inmobiliario ha sido una oportunidad aprovechada principalmente por quienes tenía un nivel medio y alto de recursos económicos. Al mismo tiempo, el déficit habitacional declarado en la Política Nacional de Viviendas en 2018 fue de 929 695 viviendas (Castro & Yuri, 2018). La construcción de viviendas es una prioridad para el gobierno cubano. (*Granma*, p. 2).

noventa. No obstante, otro importante estudio realizado en los mismos años, pero basado en un enfoque no solo monetario, confirma que se mantuvo un alto nivel de igualdad en el país a pesar del dramático contexto de la crisis económica (Informe PNUD, 2000). A partir de tal estudio, que estimó el índice de desarrollo humano y el de igualdad de género a nivel nacional y local, se desprende que Cuba ocupa el segundo lugar en América Latina en términos de igualdad en esas fechas.

Otros estudios de los años noventa y dos mil realizados por centros de investigación cubanos con diferentes enfoques metodológicos, han obtenido resultados menos positivos: identifican un aumento sustancial de las desigualdades después de las reformas de los años noventa. En este sentido se consideran, por ejemplo, las investigaciones cualitativas del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) enfocadas en diversas formas de desigualdad: participación social, acceso a la vivienda y servicios públicos, formas de empleo, ingresos, y acceso a servicios culturales. Estas investigaciones identificaron los perfiles de los grupos sociales más vulnerables: personas no blancas, mujeres, familias monoparentales con jefatura femenina, con niños y ancianos (Espina-Prieto, 2010). Los estudios nacionales llevados a cabo por el Instituto de Investigaciones Económicas (INIE) y centrados en la pobreza también sugieren un empobrecimiento de ciertos sectores de la población y un aumento de las desigualdades dentro y entre las áreas del país. Por ejemplo, Ferriol *et al.* (1997) estiman que la vulnerabilidad social es más frecuente en las regiones cubanas orientales.

La mayoría de los estudios más recientes adolecen de la falta de análisis nacionales y cuantitativos por la inaccesibilidad de los datos estadísticos. Esta limitación ha obligado a muchos investigadores a centrarse heurísticamente en aspectos específicos y cualitativos del escenario de desigualdades en general. Pañellas *et al.* (2015), por ejemplo, argumentan que las brechas sociales que ya existían en la década de 1990 se hicieron cada vez más amplias como consecuencia de la disminución del papel del Estado como regulador y redistribuidor. Esta contracción del papel del Estado en la economía podría favorecer a los que ya poseen diversas formas de capital material o inmaterial (bienes primarios o relaciones sociales) y aprovechar las nuevas oportunidades de mercado. Otros investigadores sostienen que, dado que la economía cubana nunca ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis, y que los servicios públicos esenciales disminuyeron tanto en calidad como en disponibilidad, las reformas económicas han creado niveles crecientes de desigualdad entre quienes lograron aprovechar las nuevas oportunidades y los que permanecieron en los sectores económicos estatales tradicionales (Zabala, 2014; Zabala *et al.*, 2015; Espina-Prieto & Echevarría-León, 2015).

Mediciones de distribución de bienestar

Como se mencionó arriba, el uso de variables monetarias para el análisis de la renta, los ingresos y su distribución trae consigo límites empíricos y de medición, además de los de tipo teórico ya discutidos brevemente en la introducción. Primero, los ingresos monetarios de los hogares, registrados por las encuestas institucionales, se refieren principalmente a los salarios e ingresos no laborales, como las ganancias y alquileres, pero muchas familias también tienen acceso a otras fuentes de ingresos monetarios y no monetarios, es el caso de las actividades en la economía informal, las transferencias familiares, y el autoconsumo de bienes primarios y artesanales (Clementi *et al.*, 2015). Segundo, los ingresos monetarios sufren grandes variaciones estacionales (Tarozzi, 2007) y, por el contrario, los gastos de consumo tienden a ser planos en el tiempo (Friedman, 1957). Estas dos últimas consideraciones se aplican sobre todo a los países en desarrollo. Además, ambos son muy relevantes en Cuba, donde los ingresos por actividades informales, autoconsumo y remesas están bastante extendidos. Tercero, parcialmente relacionado con el segundo punto, las respuestas a las preguntas sobre ingresos y gastos se ven afectadas por sesgos vinculados a recuerdos distorsionados (Tarozzi, 2007). Cuarto, las preguntas sobre los ingresos tienen altas tasas de no respuesta. Quinto, todavía hay muchos países en desarrollo que no realizan encuestas de hogares o que no recopilan información confiable sobre los bienes monetarios, lo que dificulta la estimación de las tasas de pobreza o desnutrición en esos países.

A fin de superar las dificultades mencionadas, se han desarrollado nuevos índices de bienestar y pobreza basados en la posesión de bienes no monetarios y métodos de estimación alternativos⁵ para el cálculo de los índices tradicionales. Esta clase de índices se han elaborado primeramente por parte de Filmer & Pritchett (2001) para estimar el estatus socioeconómico de las familias indias en diferentes regiones. Es un tipo que comparte el rasgo de resumir información —principalmente recopilada y calculada a nivel familiar— sobre la satisfacción de necesidades básicas o la posesión de bienes duraderos, el acceso a servicios fundamentales y las características sociodemográficas.

Las tres principales ventajas de dichos índices se comentan a continuación. En primer lugar, las tasas de no respuesta a las preguntas sobre la posesión de bienes no monetarios son generalmente más bajas que en las preguntas sobre los

⁵ Elbers *et al.* (2003) desarrollan el “método de imputación”, una herramienta ampliamente utilizada en estos programas y proyectos dentro del Banco Mundial. Sin embargo, debido a la falta de variables necesarias para conseguir que este procesamiento se ejecute —en particular en la propiedad y las características del hogar— no podemos usarlo.

ingresos y, cuando el cuestionario se aplica en la casa, el entrevistador puede detectar o confirmar la información. Una segunda razón se relaciona con el hecho de que la información sobre la propiedad de los bienes normalmente se recopila en forma de variables discretas (¿Tiene? Sí, No), por lo que las respuestas son más confiables y están menos sujetas a sesgos relacionados con los recuerdos. En tercer lugar, la información relacionada con la posesión de bienes muebles e inmuebles —los metros cuadrados de la casa, o el número de habitaciones en la vivienda, etcétera—, así como las características demográficas son evidentemente más duraderas o estables en el tiempo respecto a las variables monetarias —típicamente, los ingresos laborales— y menos influenciadas por la dinámica del ciclo económico (Moser & Felton, 2007). Se deduce que, en algunos aspectos, dan una imagen más cercana del nivel de vida a largo plazo.

Los resultados de los estudios que utilizan estos nuevos índices a menudo difieren de los obtenidos con los métodos de medición convencionales, contruidos a partir de las variables monetarias (Deaton, 1997; Bollen *et al.*, 2001; Sahn & Stifel, 2003; Sastry, 2004; Fay *et al.*, 2005; Filmer, 2005; McKenzie, 2005; Ainsworth & Filmer, 2006; Moser & Felton, 2007; Booysen *et al.*, 2008; Naschold, 2012; Ward, 2014).⁶ Por ejemplo, el estudio de Ward (2014) sobre China utilizó un índice socioeconómico basado en los bienes no monetarios, y encontró que la desigualdad económica ha disminuido en lugar de aumentar en el periodo comprendido entre 1989 y 2006. Incluso en el caso de Cuba, se observa que los resultados de los estudios que utilizan índices estándar con variables monetarias son diferentes de los basados en índices que parten de la medición de bienes no monetarios. En este sentido, se puede observar este comportamiento en estudios de finales de los años noventa del INIE y PNUD arriba mencionados: la primera estimación del índice de Gini de 0.38 sugiere niveles preocupantes de desigualdad (Ferriol, 2003), especialmente para un país socialista, mientras que el estudio del PNUD, que utilizó el enfoque multidimensional mediante la creación de índices basados en activos no monetarios, coloca a Cuba en el segundo lugar en América Latina por niveles de igualdad (PNUD & CIEM, 2000).

Teniendo en cuenta la situación de Cuba descrita, un análisis de la distribución del bienestar en Cuba basado exclusivamente en el uso de variables monetarias (ingresos o gastos del consumidor) resulta poco claro. De hecho, al estar los salarios estancados y ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas, el bienestar se obtiene combinando los salarios con otros tipos de recursos: fuentes

⁶ Muchos investigadores recurren al índice de activos para hacer estimaciones sobre la distribución de la riqueza y el bienestar mediante el conjunto de datos del DHS (Encuestas demográficas y de salud, <http://www.dhsprogram.com/>). Desafortunadamente, a pesar de su gran cantidad de información, no la hay sobre Cuba.

adicionales de ingresos, a menudo ilegales —y por lo tanto no declaradas en las encuestas—, y los servicios y bienes esenciales proporcionados por el Estado.

Datos y métodos

El objetivo principal de este artículo es ofrecer un análisis de la distribución del bienestar en Cuba para el periodo 2006-2014, centrado en el acceso a bienes y servicios fundamentales no monetarios ni alimentos. Para este propósito, hemos utilizado datos de fuentes institucionales que contienen una amplia gama de informaciones sobre las familias cubanas y que se encuentran en la encuesta *Multiple Indicator Cluster Surveys* (MICS-UNICEF).

Desde la década de los noventa, las encuestas MICS constituyen uno de los principales recursos para estudiar la condición de niños y mujeres a nivel internacional. Los datos MICS también han servido ampliamente para estimar los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y serán la fuente más importante para estimar el grado de logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la Agenda 2030.⁷

Hay varias razones que hacen apropiado el uso de los datos MICS para estimar el nivel de bienestar y su distribución en el caso de Cuba. En primer lugar, las encuestas realizadas en Cuba son estadísticamente representativas de la población a nivel nacional. En segundo, cada encuesta anual reunió gran cantidad de información sobre un aproximado de diez mil familias cubanas: características demográficas, educación, y acceso a servicios básicos. En tercero, las encuestas se realizan de forma periódica: 2006, 2011 y 2014 y sus microdatos están disponibles. Estas condiciones permiten estudiar las tendencias en la distribución del bienestar, entendido como el acceso a los bienes y servicios fundamentales, en el transcurso de casi una década. Cuarto, los datos se generaron dentro de una encuesta internacional que utilizó un procedimiento estandarizado entre los países involucrados. Como resultado, es posible emprender estudios comparativos replicando los modelos de análisis aquí adoptados en otros países seleccionados.

Utilizando los datos MICS, nuestro estudio es, por lo tanto, el primer intento de construir un índice de bienestar, entendido como el acceso a los bienes y servicios fundamentales no monetarios, que hemos denominado índice de bienes y servicios fundamentales OBSF para Cuba a nivel nacional.⁸ Con este

⁷ Para más detalles de la encuesta MICS-UNICEF en Cuba, véase <http://mics.unicef.org/surveys>

⁸ Un estudio que elaboró un índice de riqueza a partir de la posesión de activos no monetarios es el de Romanó & Barrera (2019), pero es a escala local y no nacional.

propósito, hemos seleccionado once variables disponibles en las tres encuestas de muestra MICS-UNICEF de 2006, 2011 y 2014. La tabla 1 muestra la descripción de las variables seleccionadas para cada año seleccionado.

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las variables seleccionadas por el índice BFS

<i>Datos en porciento</i>	<i>2006</i>	<i>2011</i>	<i>2014</i>
<i>Fuente principal de agua potable</i>			
Tubería dentro de la vivienda	59.25	61.38	63.45
Tubería dentro del patio o parcela	12.65	14.47	12.89
Otro (tubería al vecino, llave pública, pozos, manantial, agua de lluvia...)	28.09	24.16	23.66
<i>Trata el agua para hacerla más segura para beber</i>			
Si	36.22%	39.54%	74.53%
No	63.78%	60.46%	25.47%
<i>Tipo de instalación sanitaria</i>			
Inodoro conectado al alcantarillado	42.15	45.03	48.91
Otro (inodoro conectado al tanque séptico, letrina...)	57.85	54.97	51.09
<i>Instalación sanitaria compartida</i>			
Si	8.18	5.87	5.40
No	91.82	94.13	94.60
<i>Nivel de educación del jefe de hogar</i>			
Primario o Ninguno	23.06	15.86	13.7
Secundario y Obrero calificado	30.75	28.52	26.14
Técnico Medio/Preuniversitario	35.35	38.07	42.15
Superior	10.35	17.55	18.00
<i>Nivel educacional más alto al que asistió una mujer del hogar</i>			
Primario o Ninguno	3.97	2.65	2.33
Secundario y Obrero calificado	28.41	20.58	18.44
Técnico Medio/Preuniversitario	54.33	52.75	55.61
Superior	10.35	24.01	23.61
<i>Al menos un graduado en el hogar</i>			
Si	73.36	62.93	63.87
No	26.64	37.07	36.13
<i>Niños con menos de dos años en el hogar</i>			
Con	90.90	89.03	88.94
Sin	9.10	10.97	11.06
<i>Edad del jefe del hogar en años</i>			
Menos de 51 años	41.63	40.51	40.02
Mas de 50 años	58.37	59.49	59.98
<i>Hogar con más de cuatros miembros</i>			
Si	87.88	88.94	93.00
No	12.12	11.06	7.00
<i>Área</i>			
Urbana	73.74	75.07	77.35
Rural	26.26	24.93	22.65

Fuente: Elaboración propia.

Como las variables utilizadas son categoriales (ordinales y dicotómicas), creamos el índice BFS aplicando el análisis de componentes principales (ACP) en las matrices de correlación poliserial⁹ que, a diferencia del análisis de componente principal estándar, no introduce distorsiones ligadas a las correlaciones negativas entre las diferentes categorías de la misma variable categorial (Ward, 2014; Kolenikov & Angeles, 2009). Aplicando este procedimiento hemos obtenido un índice de bienestar que utiliza pesos generados con el ACP en matrices de correlación policóricas de un conjunto de variables.

Las variables seleccionadas se refieren a cuatro dimensiones (tabla 3). Un primer grupo de variables compete a la dimensión central de nuestro estudio, que es la posesión/acceso a bienes/servicios fundamentales, principalmente sobre el acceso al agua y al saneamiento, lo cual influye decisivamente en la salud de las poblaciones en los países en desarrollo, aunque también destaca la correlación entre el acceso a estos servicios con las tasas de mortalidad infantil y la desnutrición. Además, a través de su impacto en el potencial de desarrollo físico y de aprendizaje de los niños, la disponibilidad de servicios de salud y fuentes de agua seguras afecta la formación de capital humano y la productividad como trabajadores en su adultez. Un segundo grupo de variables tiene que ver con el nivel educacional alcanzado por los miembros del hogar, en el cual se encuentra la variable del nivel educacional más alto alcanzado por al menos una mujer del hogar que puede considerarse un proxy de la condición femenina medida en términos de la capacidad de autodeterminación. Un tercer grupo de variables incluye las características sociodemográficas —hablamos de la familia, del número y edad de sus miembros— que, según la literatura, están asociadas con la capacidad de obtener bienestar. Un cuarto grupo de variables se refiere a la dimensión espacial —vivir en un área rural o urbana o en determinadas regiones del país— que, según la literatura, afecta la distribución de las oportunidades de bienestar. Los dos últimos grupos de variables fueron principalmente variables de control.

La selección de las variables está determinada por los límites existentes: la información sobre la propiedad de bienes duraderos y no esenciales —TV, motocicletas y otros bienes muebles utilizados— no está incluida en nuestro índice BFS porque son datos que no están disponibles. Sin embargo, teniendo en cuenta las características del sistema cubano, nuestro enfoque permite explorar los efectos de las reformas en la distribución de los bienes y los servicios básicos producidos y distribuidos por el Estado que, junto con las necesidades alimenticias, pueden influir en la satisfacción de las necesidades básicas y, en consecuencia, en el desarrollo humano.

⁹ Para este tipo de análisis hemos utilizado Stata 13, comando polychoricpca (Kolenikov, 2004).

Los servicios y bienes fundamentales incluidos en nuestro índice se diferencian de otros porque son los que no pueden adquirirse en el mercado, pues no lo tienen en Cuba. De hecho, son los que asigna el Estado a cada familia de forma gratuita o a un precio simbólico. Se deduce que su acceso es (casi) del todo independiente de la distribución del ingreso monetario. El papel exclusivo del Estado en la provisión de los servicios básicos y la ausencia de mercados correspondientes hacen que Cuba sea poco comparable con los demás países en desarrollo en donde este tipo de acceso solo está mínimamente garantizado por el Estado y depende significativamente del poder monetario de los individuos ya que recurren a su compra en el mercado.

Aplicando la técnica del análisis de componentes principales a las variables de la tabla 1, hemos construido el índice de bienestar BFS. Como resulta esperado, extrajimos el primer vector que explica más del 29.68% de la varianza total¹⁰ (la tabla 2 muestra los componentes principales con los correspondientes valores propios y la variancia explicada). Este valor de 29.68% de la variancia explicada está en línea con los resultados de estudios similares realizados en otros países: 26% en el estudio de Filmer & Pritchett (2001), 24% en el de Ward (2014) y 27% en el de McKenzie (2005).

Tabla 2. Componentes principales con los correspondientes valores propios y la variancia explicada

	Valores propios	Variancia explicada	Variancia explicada acumulada
1	3.265335	0.296849	0.296849
2	1.966868	0.178806	0.475655
3	1.433086	0.130281	0.605935
4	1.133014	0.103001	0.708937
5	0.805534	0.073230	0.782167
6	0.792187	0.072017	0.854184
7	0.518653	0.047150	0.901334
8	0.397009	0.036092	0.937426

¹⁰ Estimamos el índice de Kaiser-Meyer para controlar la adecuación del muestreo con respecto al número de variables utilizadas en el modelo de análisis de componentes principales. El *software* Stata incluye entre los comandos de postestimación la del índice de Kaiser-Meyer por el ACP estándar (comando `pcavarlist`), mientras que no lo permite por el análisis poliserial (`polychoricpca`). Por lo tanto, con el mismo conjunto de variables estimamos primero un modelo de análisis de componentes estándar y después el índice de Kaiser-Meyer (comando `Stataestat kmo`). El índice es de 0.6627, que se considera mediocre (cuando el valor del índice está por debajo del valor 0.4 se considera no preferible la opción de no utilizar el método del análisis de componentes principales). Además, esta estima debe considerarse conservadora, pues el análisis estándar es menos eficiente que el análisis poliserial cuando se utilizan variables dicotómicas y ordinales dado que introduce distorsiones en las estimaciones debidas a las correlaciones negativas entre las categorías de las mismas variables categoriales transformadas en tantas dicotómicas cuantas son las categorías.

Tabla 2. (Continuación)

	Valores propios	Variancia explicada	Variancia explicada acumulada
9	0.296286	0.026935	0.964361
10	0.267806	0.024346	0.988707
11	0.124221	0.011293	1.0

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Coeficientes obtenidos por el análisis de componentes principales

Variables	Índice BFS	Coefficientes	Dimensiones
<i>Cuál es la fuente principal de agua potable de los miembros de su hogar</i>	Tubería dentro de la vivienda	0.336	<i>Bienes y servicios fundamentales</i>
	Tubería dentro del patio o parcela	0.041	
	Otro	-0.391	
<i>Trata el agua para hacerla más segura para beber</i>	Sí	0.148	
	No	-0.153	
<i>Tipo de instalación sanitaria</i>	Inodoro conectado al alcantarillado	0.430	
	Otro	-0.248	
<i>Instalación sanitaria compartida</i>	Sí	-0.586	
	No	0.003	
<i>Nivel educacional del jefe del hogar</i>	Primaria o ningún	-0.358	
	Secundaria y Obrero calificado	-0.161	
	Técnico medio / Preuniversitario	-0.000	
	Superior	0.228	
<i>Hogar con al menos un miembro con educación superior</i>	No	-0.279	
	Sí	0.303	
<i>Nivel educacional más alto al que asistió una mujer del hogar</i>	Primaria o ningún	-0.916	
	Secundaria y Obrero calificado	-0.499	
	Técnico medio / Preuniversitario	-0.110	
	Superior	0.349	
<i>Área</i>	Urbana	0.268	<i>Área urbana</i>
	Rural	-0.376	
<i>Número total de miembros del hogar</i>	0 – 4	-0.081	<i>Sociodemográficas</i>
	5 +	0.127	
<i>Familia con niños menores de 2 años</i>	Sí	0.010	
	No	-0.002	
<i>Edad del jefe de hogar</i>	Menos de 50	-0.188	
	Más de 50	0.163	

Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los coeficientes que se muestran en la tabla 3 indica que, como se esperaba, las variables relacionadas con la posesión o el acceso a bienes y servicios básicos —tipo de fuentes de agua y de instalaciones sanitarias, y la educación superior— influyen fuertemente en el índice BFS: la posesión/

acceso a bienes/servicios de mayor calidad se asocia con coeficientes con un peso significativo y positivo, y viceversa. Observando los coeficientes asociados a las variables sobre los niveles educativos de los miembros del hogar, se nota que el nivel de escolarización de las mujeres tiene un impacto importante en el bienestar de las familias. Los coeficientes asociados con las variables espaciales siguen la tendencia esperada: de hecho, el coeficiente del área urbana es positivo, lo que sugiere que las oportunidades de bienestar en estas áreas son mayores. Las variables demográficas tienen valores en la dirección esperada pero sin peso significativo. Tomados en conjunto, los coeficientes señalan que el primer componente principal extraído es un índice de bienestar, medido a partir de los bienes fundamentales no monetarios.

El índice BFS, por la forma en que está construido, tiene un promedio de cero; por lo tanto, para analizar su distribución, no es posible construir los índices de concentración más comunes, como el Gini, el Theil, el Atkinson o el índice de entropía generalizado. Para analizar la distribución del bienestar, utilizamos el índice McKenzie (2005), porque es compatible con la distribución del BFS (que incluye valores cero y negativos). Este índice respeta el axioma de la invariancia de escala y permite estimar la proporción de la varianza total de la variable de bienestar atribuible a una partición dada de la distribución. Esta medida corresponde a:

$$I_c = \frac{\sigma_c}{\sqrt{p}}$$

Donde σ_c es la desviación estándar del índice BFS de las familias que pertenecen a la “comunidad” c (que podría identificar el área, o el año, como en nuestros casos; véase más abajo) y p es el primer y más grande valor propio producido por la matriz de correlación y además la varianza de BFS en toda la muestra. De la formulación se deduce que el índice de McKenzie es una medida de desigualdad para una muestra específica, ya que se define como la desviación estándar del primer componente principal en una comunidad de interés dada en relación con la desviación estándar de la muestra en su conjunto. Al tratarse de una medida para una muestra específica no se pueden comparar entre sí los valores absolutos de índices de McKenzie estimados en muestras diferentes. Desde el punto de vista cuantitativo, cuanto mayor sea el valor que I_c asume en una comunidad c , mayor será el grado de desigualdad en la comunidad entre los años —o en relación con las otras comunidades de toda la muestra—. Este indicador satisface muchas de las propiedades fundamentales de una medida de desigualdad:

- anonimato (es invariable respecto a las permutaciones del índice de activos para familias en la misma comunidad);
- invariancia de escala;
- independencia de la población
- transferir la propiedad de Pigou-Dalton¹¹

Estimamos el índice McKenzie de desigualdad de la distribución de BFs para 2006, 2011 y 2014 (gráfica 1).

Resultados

El análisis descriptivo con una perspectiva temporal-histórica de las variables seleccionadas en las tres encuestas (2006, 2011 y 2014) muestra algunas características esenciales de la paradoja cubana: Cuba tiene estadísticas sociales comparables con las de los países industrializados, a pesar su economía pobre. Según la tabla 1, el nivel promedio de educación alcanzado por la población cubana, que ya era alto en 2006, continuó aumentando en los años siguientes, especialmente en 2006-2014: la prevalencia de familias encabezadas por un individuo sin educación o que tiene completado solo el ciclo de la escuela primaria ha disminuido del 23.06% de 2006 a aproximadamente el 13.7% de 2014, mientras que la proporción de familias con personas que logran terminar los niveles educativos más altos ha crecido.¹² La estructura de edad de la población cubana es similar a la típica de los países industrializados, además, en el periodo examinado, el tamaño de las familias, ya reducido en 2006, se ha contraído aún más: aumentaron las familias formadas por uno o dos miembros, y disminuyeron las de cuatro o más personas.

Como ya se discutió arriba, el acceso al agua potable y al saneamiento son algunos de los principales factores que influyen decisivamente en el estado de salud de las personas. Existen diferentes fuentes de suministro de agua, unas

¹¹ Para más información, véase McKenzie (2005).

¹² Resultado de las políticas emprendidas como parte del proyecto “Batalla de ideas”. Con este, el gobierno cubano logró aumentar aún más el nivel educativo de la población local al asignar como prioridad principal garantizar el acceso universal a la cultura y la educación (Echevarría-Leon & Tejuca, 2015). Los indicadores educacionales que utilizamos es porque están disponibles y se refieren al nivel y cantidad de educación, mientras que no tenemos informaciones sobre la calidad de esta. Ese aumento de los niveles educacionales de los años dos mil fue acompañado por la inquietud de una disminución de la calidad de la educación impartida debido, entre otras cosas, a la emigración de los profesores con más experiencia hacia otros sectores de la economía o al exterior, al uso de profesores “emergentes” y a la transmisión de teleclases. Desafortunadamente, no tenemos datos que permitan evaluar la calidad de la educación y sus eventuales cambios en el tiempo.

más seguras que otras. El estándar más avanzado, casi universal en los países industrializados, es el de las tuberías dentro del hogar. La mayoría de las familias cubanas tienen acceso a esta fuente de agua, y su porcentaje se elevó en el periodo considerado: pasó del 59% en 2006 al 63% en 2014.¹³ Por el contrario, el porcentaje de las familias que se ven obligadas a utilizar fuentes de agua más peligrosas y precarias —una fuente no protegida, agua de lluvia, de pipa, de carreta con tanque o agua de superficie— es muy pequeño, con niveles de irrelevancia estadística para 2014 (tabla 1). Esta tendencia tiene otra confirmación en los datos más recientes, disponibles en el Anuario 2020 que se refieren a 2019: el porcentaje de población con acceso a fuentes de agua mejoradas es de 96.7%, y en particular de 98.3% en las áreas urbanas y de 91.5% en las rurales. Sin embargo, la mayoría de los cubanos prefieren tratar el agua para mejorar su potabilidad, en un porcentaje que ha aumentado rápidamente, esto es, era de menos de la mitad en 2006, pero en 2014 alcanza al 70%. Considerando que Cuba es un país en desarrollo, esta tendencia del tratamiento del agua constituye un progreso significativo. De hecho, este fenómeno está relacionado con el lanzamiento de la campaña del gobierno de 2010 dirigida a promover el tratamiento del agua y creada para erradicar brotes de cólera y otras enfermedades diarreicas (MINSAP, 2014). La situación ha mejorado significativamente incluso para las familias más desfavorecidas, es decir, aquellas que carecen de sistemas de agua corriente y potable dentro de la vivienda: el porcentaje de las familias que pueden acceder al agua al menos en el área externa, sin tener que ir a los alrededores, de hecho, se ha elevado de aproximadamente un tercio a más de la mitad. El acceso al equipo de saneamiento también mejoró durante el periodo considerado. El porcentaje de las familias cubanas equipadas con la tecnología sanitaria más avanzada —servicio sanitario conectado al sistema de alcantarillado— pasó de 42% en 2006 a más del 49% en 2014. Paralelamente, la incidencia de las familias con tecnologías sanitarias menos avanzadas, como la del baño compartido, ha disminuido (tabla 1). En general, estos resultados indican que, en el periodo examinado, el acceso a bienes y servicios esenciales tuvo influencia en porciones crecientes de la población.

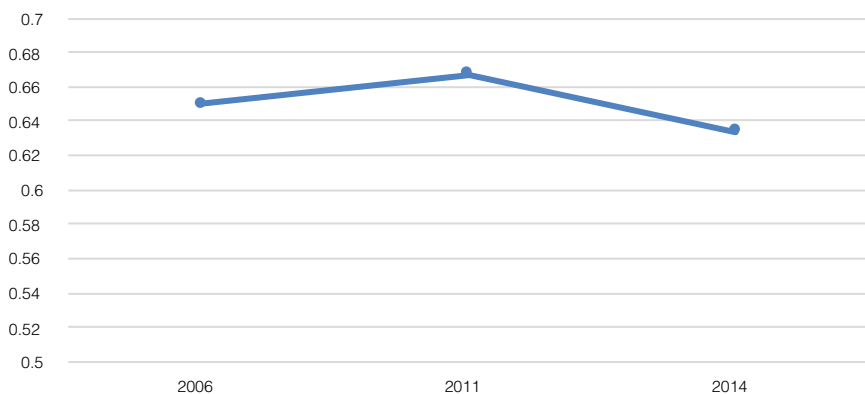
Por las razones explicadas en el epígrafe anterior, utilizamos el índice McKenzie para analizar la distribución del bienestar estimado con el índice BFS que construimos a nivel de hogar. Este índice ha revelado un aumento modesto durante el subperiodo 2006-2011 ya que era de 0.65 en 2006 y alcanzó un 0.67 en 2011, para luego, en el siguiente subperiodo, ser de 0.63 en 2014 (más bajo que en 2006). En otras palabras, nuestros resultados indican que, entre 2006

¹³ Nuevamente, los datos disponibles permiten el análisis del acceso al servicio, pero no sobre su calidad, es decir, si el agua llega las 24 horas o de manera intermitente.

y 2014, hubo una tendencia decreciente no monótona de la desigualdad de bienestar entendida en términos de acceso a bienes y servicios fundamentales no monetarios. Dicho de otra forma, se registra una disminución modesta de la desigualdad en el periodo 2006-2014 respecto al 2006-2011.

Dado que el índice McKenzie es una medida de desigualdad para una muestra específica, y los índices estimados en muestreos diferentes no son comparables en sus valores absolutos, estimamos el índice BFS separadamente y por cada año para áreas urbanas y rurales. En 2006 el índice McKenzie para las zonas rurales es de 0.5, mientras que en las urbanas es de 0.45, es decir, que el nivel de desigualdad es más alto en las áreas rurales. La diferencia entre el índice McKenzie de áreas rurales y urbanas se mantiene en 2011 y 2014. En 2011, las zonas rurales reportan 0.59 y las urbanas 0.57; y en 2014 en las zonas rurales será de 0.51 y en las urbanas de 0.49. Esto sugiere indirectamente que las políticas de inversión para el mejoramiento de la infraestructura existente y el desarrollo de las áreas rurales han mejorado el bienestar de las zonas rurales, aunque todavía es insuficiente para garantizar una igual distribución de los bienes fundamentales en las áreas rurales y urbanas (Gabriele, 2012; Nova, 2013; Leyva & Arias, 2015; Fuentes, 2014; Echevarría-Leon & Tejuca, 2015).

Gráfica 1. Tendencia del BFS por año a nivel nacional



Fuente: Elaboración propia.

Discusión y conclusiones

En los últimos diez años, el número de estudios dedicados al análisis de los desequilibrios de la distribución del bienestar y más generalmente a las desigualda-

des, ha crecido significativamente. Sin embargo, son relativamente pocos los que abordan el caso cubano por la escasez de datos disponibles. Nuestro estudio, si bien tiene límites relacionados con esta última dificultad, intenta llenar el vacío al menos parcialmente, dado que investiga una forma particular de bienestar: el acceso a bienes y servicios fundamentales no monetarios ni alimentos, que es en particular interesante en la Cuba actual donde se pretende combinar la todavía dominante redistribución —entendida como un mecanismo de integración a la Polanyi (1944)— con los mecanismos del mercado.

En comparación con otros países del continente, Cuba siempre ha asignado una gran parte del producto interno bruto a la producción y distribución de bienes fundamentales con base en un principio universal de política social: servicios de salud y educación, actividades culturales, deportivas y recreativas, y bienes materiales, como alimentos a través del mercado racionado (la libreta) por núcleo familiar. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha cambiado; debido a las crisis económicas, las inversiones en bienes fundamentales se han mantenido nominalmente, pero han disminuido en términos reales. Además, las reformas económicas adoptadas para responder a las crisis han tenido el efecto de aumentar el peso de los mercados en algunos sectores económicos específicos y de las relaciones monetarias para satisfacer las necesidades de las familias. Sin embargo, la redistribución se ha mantenido como el mecanismo predominante en los sectores tradicionales que dominan la producción de bienes fundamentales. Dadas estas circunstancias, el significado que pueden asumir los índices monetarios clásicos en Cuba —incluso si fuera posible estimarlos correctamente— es claramente diferente del asumido por estos mismos índices en otros países de economía de mercado. Como consecuencia, nuestro estudio se ha centrado en la distribución de un tipo particular de bienestar que hemos denominado BFS y que refiere a la satisfacción de las necesidades fundamentales no alimentarias.

Por lo tanto, nuestro estudio ofrece, por primera vez en los últimos años, un análisis de la tendencia en la década anterior de las desigualdades en el acceso a bienes fundamentales no monetarios en Cuba. Utilizando los datos MICS-UNICEF y encuestas representativas a nivel nacional de 2006, 2011 y 2014, creamos un índice de bienestar utilizando la técnica del análisis de componentes principales (Filmer & Pritchett, 2001; Kolenikov & Angeles, 2004, 2009; Ward, 2014). Luego, usando el índice McKenzie (2005), estimamos la distribución entre la población cubana para el periodo 2006-2014. Nuestros principales resultados sugieren que la desigualdad en el acceso a los bienes fundamentales tendió a disminuir en 2006-2014; sin embargo, la disminución es modesta y no monótona porque ha crecido la desigualdad en la primera parte de este periodo, es decir, entre 2006 y 2011. Encontramos también una disminución de las

desigualdades entre las zonas urbanas y las rurales, aunque las primeras siguen siendo favorecidas en la distribución de bienes y servicios fundamentales no monetarios ni alimentarios.

Nuestros resultados pueden parecer sorprendentes en comparación con los de estudios previos que muestran un aumento en los niveles de desigualdad de los ingresos o un deterioro en las áreas de igualdad. Sin embargo, aunque modesta, la tendencia decreciente en la desigualdad respecto al acceso a los bienes fundamentales que hemos hallado no contradice lo sugerido por dichos estudios. De hecho, esta contradicción es solo aparente, ya que hablamos de fenómenos que se arraigan en distintas esferas de la economía cubana que son casi completamente independientes entre sí (Romanò & Barrera, 2019; Domínguez, 2012). En particular, la esfera de las relaciones monetarias en Cuba se refiere a mercados segmentados, no regulados y en gran medida monopólicos e informales en los que se da la producción de bienes y servicios de consumo y de lujo. Por el contrario, el alcance de las inversiones en los servicios públicos destinados a crear bienes fundamentales y distribuirlos está regulado por la planificación central estatal. Nuestro estudio se enfoca en la esfera social y productiva que sigue dominada por el principio de redistribución. Además, la tendencia al decrecimiento en la desigualdad del BFs aquí observada no es incompatible con el deterioro de los servicios ofrecidos en las áreas de igualdad analizadas por estudios anteriores —que incluye la contracción de la educación terciaria después de 2010 (Echevarría-Leon & Tejuca 2015)—. La razón principal es que los efectos de las reformas y los recortes de inversión en términos reales en los servicios de bienestar tienen efectos años después a causa de su componente inercial. También es plausible que las inversiones masivas y capilares dirigidas al tratamiento del agua y el aumento en la propagación de sistemas sanitarios más seguros creados durante el subperiodo 2011-2014 hayan compensado el impacto distributivo negativo vinculado a la reducción de las inversiones en otros servicios clave (incluida la educación superior) que tuvieron lugar durante el subperiodo 2006-2011.

Solo un análisis completamente multidimensional de la desigualdad en Cuba, que por lo tanto incluyese bienes monetarios y no monetarios, permitirá comprender mejor las tendencias en curso, así como las relaciones entre las diferentes dimensiones del bienestar. Desafortunadamente, aún no ha sido posible llevarlo a cabo porque el acceso a los datos de la encuesta de consumo de los hogares no es público.

Referencias

- Álvarez, E., & Máttar, J. (2004). *Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI*. México: CEPAL/INIE/PNUD.
- Ainsworth, M., & Filmer, D. (2006). Inequalities in children's schooling: AIDS, orphanhood, poverty, and gender. *World Development*, 34(6), 1099-10128. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.11.007>
- Bollen, K., Glanville, J., & Stecklov, G. (2001). Economic status proxies in studies of fertility in developing countries: does the measure matter? *Population Studies*, 56(1), 81-96. <https://doi.org/10.1080/00324720213796>
- Booyesen, F., Van Der Berg, S., Burger, R., Von Maltitz, M., & Du Rand, G. (2008). Using an asset index to assess trends in poverty in seven Sub-Saharan African countries. *World Development*, 36(6), 1113-1130. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.10.008>
- Brundenius, C. (2009). Revolutionary Cuba at 50: growth with equity revisited. *Latin American Perspectives*, 36(2), 31-48. <https://doi.org/10.1177/0094582X09331968>
- Brundenius, C. (1984). *Crecimiento con equidad: Cuba 1959-84*. (Cuadernos de Pensamiento Propio). Managua: INIES/CRIES.
- Centeno, M. A. (2004). Society for Latin American Studies 2004 Plenary Lecture The Return of Cuba to Latin America: The End of Cuban Exceptionalism? *Bulletin of Latin American Research*, 23(4), 403-413. <https://doi.org/10.1111/j.0261-3050.2004.00115.x>
- Clementi, F., Dabalén, A. L., Molini, V., & Schettino, F. (2015). When the centre cannot hold: patterns of polarization in Nigeria. *Review of Income and Wealth*, 63(4), 608-632.
- Deaton, A. (1997). *The analysis of household surveys: A microeconomic approach to development policy*. Baltimore, MD: Johns Hopkins Press. <https://doi.org/10.1596/0-8018-5254-4>
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is good for the poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195-225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Dominguez, J. I. (2012). On the brink of change: Cuba's economy and society at the start of the 2010s. En J. I. Dominguez, O. Perez-Villanueva, M. Espina-Prieto, & L. Barberia (Eds.), *Cuban economic and social development: Policy reforms and challenges in the 21st century* (pp. 1-20). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dominguez, J. I. (2004). The Cuban Economy at the Start of the Twenty-first Century: An Introductory Analysis. En J. I. Dominguez, O. Perez-Villanueva, M. Espina-Prieto, & L.

- Barberia (Eds.), *Cuban economic and social development: Policy reforms and challenges in the 21st century* (pp. 1-17). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Dominguez, J. I., Perez-Villanueva, O., Espina-Prieto, M., & Barberia, L. (Eds.). (2012). *Cuban economic and social development-Policy reforms and challenges in the 21st century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Echevarría-Leon, D., & Tejuca, M. (2015). Educación y empleo en Cuba 2000-2014: entre ajustes y desajustes. En M. P. Espina & A. Echevarría (Coords.), *Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico* (pp. 50-78). La Habana: Ciencias Sociales/Casa Ruth.
- Elbers, C., Lanjouw, J. O., & Lanjouw, P. (2003). Micro-level estimation of poverty and inequality. *Econometrica*, 71(1), 355-364. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00399>
- Espina-Prieto, M. P. (2010). *Desigualdad, equidad y política social. Integración de estudios recientes en Cuba*. La Habana: Acuario.
- Espina-Prieto, M. P., & Echevarría-Leon, D. (Coords.). (2015). *Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico*. La Habana: Ciencias Sociales/Casa Ruth.
- Fay, M., Danny, L., Quentin, W., & Tito, Y. (2005). Achieving Child-Health-Related Millennium Development Goals: The Role of Infrastructure. *World Development*, 33(8), 1267-1284. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.001>
- Ferriol, A. (2003). *Acercamiento al estudio de la pobreza en Cuba*. Paper presentado en el Congress of the Latin American Studies Association (LASA), Dallas, TX, USA.
- Ferriol, A., Carriazo, G., & U-Echavarría, O. (1997). *Efectos de políticas macroeconómicas y sociales sobre los niveles de pobreza: El caso de Cuba en los años noventa*. La Habana: INIE/CIEM.
- Filmer, D. (2005). Fever and its treatment among the more and less poor in Sub-Saharan Africa. *Health Policy and Planning*, 20(6), 337-346. <https://doi.org/10.1093/heapol/czi043>
- Filmer, D., & Pritchett, L. (2001). Estimating wealth effects without expenditure data-or tears: an application to educational enrollments in states of India. *Demography*, 38(1), 115-132. <https://doi.org/10.1353/dem.2001.0003>
- Friedman, M. (1957). *A theory of the consumption function*. Princeton: Princeton University Press.
- Fuentes, S. (2014). La protección social en el ámbito de la salud: interacciones, sinergias y tensiones ente el Estado y la familia en la Cuba actual. Un intento de problematización de los espacios de igualdad. En M. del C. Zabala Argüelles (Comp.), *Algunas claves para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores* (pp. 187-220). La Habana: Acuario.

- Gabriele, A. (Ed.). (2012). *The economy of Cuba after the VI Party Congress*. Nueva York: Nova Science.
- Galbraith, J. K., Spagnolo, L., & Munevar, D. (2006). *Pay inequality in Cuba: The Special Period and after*. (ECINEQ WP 2006-52).
- García, A., & Anaya, B. (2015). Gastos básicos de una familia cubana urbana 2011. Situación de las familias estado-dependientes. En M. del C. Zabala, D. Echevarría-León, M. R. Muñoz & G. E. Fundora (Comps.), *Retos a la equidad en el proceso de actualización del modelo económico cubano* (pp. 84-114). La Habana: Ciencias Sociales.
- Kolenikov, S. (2004). Polychoric. *STATA software package*.
- Kolenikov, S., & Angeles, G. (2009). Socioeconomic status measurement with discrete proxy variables: is principal component analysis a reliable answer? *Review of Income and Wealth*, (55), 128-165. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2008.00309.x>
- Leyva, A., & Arias, M. A. (2015). Reformas, ruralidades y nuevos campesinos/as en Cuba. En M. Espina-Prieto & D. Echevarria-Leon (Comps.), *Desafíos y propuestas para las políticas públicas. Cuba: los correlatos socioculturales del cambio económico* (pp. 128-147). La Habana: Casa Ruth.
- McKenzie, D. (2005). Measuring inequality with asset indicators. *Journal of Population Economics*, (18), 229-260. <https://doi.org/10.1007/s00148-005-0224-7>
- Mesa-Lago, C. (2015). La desigualdad del ingreso y la experiencia de América Latina. *Temas*, (84), 22-30.
- Milanovic, B. (2019). *Capitalism, alone*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ministerio de Salud Pública (Minsap). (2014). *Anuario de Salud*. La Habana: Ministerio de Salud Pública.
- Moser, C., & Felton, A. (2007). *The Construction of an asset index measuring asset accumulation in Ecuador*. (Working Paper no. 87, IDPM/Chronic Poverty Research Center). <https://doi.org/10.2139/ssrn.1646417>
- Naschold, F. (2012). "The poor stay poor": household asset poverty traps in rural semi-arid India. *World Development*, 40(10), 2033-2043. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.05.006>
- Nova, A. (2013). Continuidad de los cambios en la agricultura. En O. E. Pérez Villanueva & R. Torres Pérez (Comps.), *Miradas a la economía cubana. Entre la eficiencia económica y la equidad social* (pp. 57-70). La Habana: Caminos.

- Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). (2020). Sistema de Información Estadística Nacional. <http://www.onei.gob.cu/node/16275>
- Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). (2015). Sistema De Información Estadística Nacional. <http://www.onei.gob.cu/node/13608>
- Pañellas, D., Echevarría, D., & Lara, T. (2015). Cuba, los impactos sociales de las transformaciones económicas. Lo que dicen los estudios sociales 2008-2013. En M. Espina-Prieto & D. Echevarría-Leon (Comps.), *Los correlatos socioculturales del cambio económico* (pp. 224-256). La Habana: Casa Ruth.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the 21st century*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674369542>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2019). *Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI*. Nueva York: PNUD. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), & Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). (2000). *Investigación sobre desarrollo humano y equidad en Cuba 1999*. La Habana: Caguayo.
- Polanyi, K. (1944). *The great transformation*. Boston: Beacon Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of justice*, Cambridge: Harvard University Press.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: why global markets, states, and democracy can't coexist*. Oxford University Press.
- Romanò, S. (2013). *Il Modello sociale ed economico di Cuba. Dal "periodo especial in tempo di pace" all'attuale tappa di "aggiornamento del socialismo"*. Turin: Trauben.
- Romanò, S. (2012). Commercial circuits and economic inequality. En A. Gabriele (Ed.), *The Economy of Cuba after the VI Party Congress* (pp. 97-130). Nueva York: Nova Science.
- Romanò, S., & Barrera, D. (2019). The impact of market-oriented reforms on inequality in transitional countries: new evidence from Cuba. *Socio-Economic Review*, 19(2), 765-787. <https://doi.org/10.1093/ser/mwz016>
- Sahn, D. E., & Stifel, D. C. (2003). Exploring alternative measures of welfare in the absence of expenditure data. *Review of Income and Wealth*, 49(4), 463-489. <https://doi.org/10.1111/j.0034-6586.2003.00100.x>

- Sastry, N. (2004). Trends in socioeconomic inequalities in mortality in developing countries: the case of child survival in São Paulo, Brazil. *Demography*, (41), 443-464. <https://doi.org/10.1353/dem.2004.0027>
- Schettino, F., & Gabriele, A. (2008). Child malnutrition and mortality in China and Vietnam in a comparative perspective. *Economic Change and Restructuring*, 41(1), 29-59. <https://doi.org/10.1007/s10644-008-9037-5>
- Sen, A. K. (1999). *Commodities and capabilities*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, A. K. (1970). The impossibility of a Paretian liberal. *Journal of Political Economy*, 78(1), 152-157. <https://doi.org/10.1086/259614>
- Tarozzi, A. (2007). Calculating comparable statistics from incomparable surveys, with an application to poverty in India. *Journal of Business & Economic Statistics*, 25(3), 314-336. <https://doi.org/10.1198/073500106000000233>
- Ward, P. (2014). Measuring the level and inequality of wealth: and application to China. *Review of Income and Wealth*, 60(4), 613-635. https://doi.org/10.1111/roiw.12151_2
- Zabala, M. C. (Ed.). (2014). *Algunas claves para pensar la pobreza en Cuba desde la mirada de jóvenes investigadores*. La Habana: Acuario.
- Zabala, M. C., Echevarría-León, D., Muñoz, M., & Fundora, G. (2015). *Retos a la equidad en el proceso de actualización del modelo económico cubano*. La Habana: Ciencias Sociales.